

Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En estos autos RIT O-257-2020, RUC 2240428451-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, por sentencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, se dio lugar en forma parcial a la demanda declarativa de relación laboral, despido indirecto y cobro de prestaciones, deducida por don Eduardo José Guillermo Bustamante Ulloa en contra de la Municipalidad de Rauco.

La demandada presentó recurso de nulidad que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Talca, mediante sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en una o más sentencias firmes emanadas de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe contener fundamentos plausibles, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales, y acompañar copia del o de los fallos ejecutoriados que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que la materia de derecho propuesta en el recurso de unificación deducido por la demandada consiste en determinar *“la existencia de relación contractual en los términos del art. 7 y ss. del C. del Trabajo y/o del art. 4 de la Ley N°18.883.”*

La recurrente sostiene que las partes se encontraban unidas por contratos a honorarios, en los que el actor se obligó a prestar servicios específicos y por un tiempo acotado en beneficio del municipio que, a su vez, pagó la contraprestación respectiva, vínculo regido por las disposiciones relativas al arrendamiento de servicios inmateriales contenidas en el Código Civil, entendiéndose, por tanto, que las labores cumplidas por el actor corresponden a las descritas en el artículo 4 de la Ley N°18.883; razones por las que solicita la invalidación del fallo recurrido y se dicte el de reemplazo que indica.

**Tercero:** Que para la procedencia del recurso de unificación, es requisito fundamental que existan distintas interpretaciones respecto de una misma materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, por lo que se debe constatar si los establecidos



en el pronunciamiento recurrido, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados, son asimilables con los propuestos en los de contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance de la norma que resuelve la controversia, enfrentada a una situación equivalente en una sentencia anterior, decidida en términos contrapuestos, interpretación que dependerá del marco fáctico asentado en cada caso.

**Cuarto:** Que, por lo expuesto, se deben considerar los hechos establecidos en la instancia:

1.- El demandante, don Eduardo José Bustamante Ulloa, ingeniero informático, fue contratado a honorarios por la Municipalidad de Rauco, permaneciendo vinculadas las partes, sin solución de continuidad, desde el 1 de enero de 2017 al 9 de septiembre de 2022, relación que terminó por despido indirecto fundado en la causal del artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, por no pago de las cotizaciones de seguridad social, quien percibió, como última retribución mensual por sus servicios, la suma de \$777.778.

2.- Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2017, el actor fue contratado a honorarios en los términos previstos en la Ley N°19.886 y, por el tiempo restante, según el artículo 4 de la Ley N°18.883.

3.- Las funciones cumplidas por el actor, fueron las siguientes:

a) Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2017, se desempeñó como “apoyo informático que permita suplir las necesidades propias del servicio, en el ámbito de redes, programación, sitio web y plataformas”, y, durante diciembre de ese año, ejerció la labor de “asesor informático, el cual tendrá que cumplir los siguientes encargos específicos: servicio de apoyo informático que permita suplir las necesidades propias del servicio, en el ámbito de redes, programación, sitio web y plataformas de transparencia, lobby y probidad”.

b) Los contratos suscritos en 2018, refieren el cumplimiento del siguiente cometido: “servicio de asesor de transparencia, para Unidad de Transparencia”.

c) En 2019, fue contratado para realizar la labor de “servicio de asesor de transparencia, apoyo informático en plataformas tales ej. lobby, intereses y patrimonio, servicio que apoyará la labor de la Unidad Jurídica y Transparencia”.

d) El año 2020 prestó servicios “de asesor informático y transparencia, dependencia de asesor jurídico”.

e) El 2021, el contrato correspondiente refiere el cumplimiento del siguiente “cometido accidental y específico”: “servicio de asesor informático y transparencia de la Ilustre Municipalidad de Rauco, dependiente de la asesora jurídica municipal”.



f) Durante el 2022, ejerció el “servicio de asesor informático y transparencia de la Ilustre Municipalidad de Rauco”.

g) Además, de acuerdo a los informes de gestión mensual, visados por su jefatura, realizó las siguientes actividades: “confección de afiches de permiso de circulación, apoyo en confección de pendones para Centros de Acción de la Mujer, elaboración de video de actividad ‘Cerro Pelao’, apoyo en desarrollo de material gráfico para actividad del Departamento Social, apoyo en desarrollo de tríptico y díptico para promoción de actividades culturales, apoyo en tramitación de decretos de adjudicación mediante trato directo, apoyo a asesor jurídico en modificación de formatos y redacción de documentos, apoyo en proceso de ventas de permisos de circulación, traspaso de permisos de otras comunas, asistencia a reuniones de coordinación de la unidad jurídica y búsqueda de jurisprudencia”.

h) El actor se encontraba obligado a asistir a reuniones con otros departamentos de la municipalidad en representación de la asesora jurídica, a quien, “en una oportunidad, se le ordenó redactar un decreto rectificatorio, enmendando su numeración, e incluso la redacción de un protocolo para evitar contagios ‘covid’, la confección de contratos a plazo fijo y entrega de un formato refundido de una ordenanza, la modificación del reglamento de compras públicas, y dar formato a las bases de un concurso de director de control interno”.

i) Por último, el demandante participó en una “noticia difundida con fecha 12 de agosto de 2020 en redes sociales por el propio municipio que señala ‘porque queremos que te sientas seguro...el ingeniero informático Eduardo Bustamante, nos entrega recomendaciones para protegernos de estafas vía telefónica, correo electrónico, páginas bancarias, entre otras. #RaucoContigo”, apareciendo la imagen de aquél.

4.- El demandante se encontraba sujeto a la subordinación y dependencia de la asesora jurídica del municipio.

5.- La demandada no pagó las cotizaciones de seguridad social del actor.

**Quinto:** Que, para la judicatura de la instancia, la contratación del actor de acuerdo a la Ley N°19.886 no era procedente, por cuanto su artículo 3 letra a) lo prohíbe en forma expresa, estimando, en relación con los restantes convenios suscritos por las partes, que la defensa que sostiene la demandada se ve afectada por la duración del vínculo, que se extendió por más de cinco años, y porque la funciones que aquél prestó no pueden calificarse como accidentales o específicas, puesto que, con el avance de la tecnología y su incorporación a los servicios públicos, la labor de asesor informático carece de dicho carácter, porque responde a una necesidad permanente del municipio, cualidad que igualmente advierte en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia,



ya que consiste en un imperativo a que se debe someter la recurrida. Asimismo, observa que las funciones descritas en cada contrato carecen de detalles que permitan entender que ejercía una actividad puntual y no habitual, advirtiendo que por esta vía, la demandada pretende cumplir necesidades permanentes, carácter que no se condice con el tenor del artículo 4 de la Ley N°18.883.

Por lo anterior, y considerando que el actor desempeñó funciones diversas a aquellas para las que fue contratado, la correcta resolución del caso exige revisar si la relación entre las partes respetó el marco normativo invocado por la demandada para justificar su vinculación con aquél, constatando que el primer período que sirvió, contravino expresamente el contenido de la Ley N°19.886, limitación que también considera rebasada al tener presente lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N°18.883, porque no se trató de actividades específicas o accidentales, sino permanentes y propias del servicio.

Finalmente, en lo que concierne a la causal de despido invocada, el tribunal consideró que si bien el actor se encontraba en condiciones de pagar íntegramente sus cotizaciones con cargo a los honorarios que percibió, en nada hace variar el análisis entregado, puesto que en una vinculación de carácter laboral, es el empleador el que se encuentra obligado a su entero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 inciso segundo de la Ley N°17.322, configurándose, en consecuencia, la causal prevista en el artículo 160 número 7 del Código del Trabajo, resultando procedente la solución de las prestaciones reclamadas, a las que finalmente resultó condenada la Municipalidad de Rauco, según se especifica en lo resolutivo del fallo del grado.

**Sexto:** Que la Corte de Apelaciones de Talca, conociendo el recurso de nulidad deducido por la demandada, fundado en la causal contenida en el artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a sus artículos 7, 8 y 9, y a los artículos 3 y 4 de la Ley N°18.883, sostuvo, luego de compartir la precisión efectuada en el fallo de la instancia relacionada con la prohibición impuesta por la Ley N°19.886 que impedía la contratación a honorarios del actor, que se efectuó una correcta y adecuada aplicación del derecho, en particular de aquellas disposiciones, por lo que la calificación jurídica entregada respecto del vínculo contractual, se ajustó a las disposiciones vigentes, conclusión coherente con su duración y por no concurrir las hipótesis regladas en los incisos primero y segundo del artículo 4 de la citada ley; razones por las que decidió rechazar tal arbitrio.

**Séptimo:** Que para contrastar la decisión impugnada, en lo que concierne a la materia de derecho propuesta, la recurrente presentó tres sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y Talca, en los autos Rol N°56-2016 de 14 de abril de 2016, 318-2016 de 5 de mayo de 2016 y 165-2022 de



6 de junio de 2022, respectivamente, de las que no será considerada esta última, por cuanto fue acompañada sin el respectivo certificado de encontrarse firme o ejecutoriada, incumpliendo el requisito expreso previsto en el artículo 483 del Código del Trabajo.

El primer fallo resolvió la alegación efectuada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), referida a su calidad de empresa dueña de la obra al suscribir convenios con entidades ejecutoras, en este caso con la Municipalidad de Santo Domingo, para el desarrollo del programa PRODESAL, calidad que finalmente se desestimó, por lo que fue rechazada la aplicación de las normas que regulan el régimen de subcontratación, precisando, en lo que interesa al recurso, que, *“en todo caso, a estas municipalidades tampoco le asiste una responsabilidad amplia en el cumplimiento de las normas laborales, ya que el propio Estatuto de los Funcionarios Municipales, establecido por la Ley N°18.883, señala en su artículo 3° los casos específicos en que aquellas pueden contratar personal regido por el Código del Trabajo, no pudiendo extenderse a otros supuestos, como el del caso de autos, ya que ello implicaría una actuación al margen de la ley, con las consiguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales para los directivos y funcionarios involucrados”*.

En el segundo fallo acompañado se establecieron los siguientes hechos: *“1.- Que el demandante se vinculó con la Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante una serie de contratos a honorarios denominados de ‘suma alzada’ desde el 28 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. Posteriormente se suscribió segundo contrato vigente entre las partes que se inició el 16 de enero de 2015 hasta el 15 de julio de 2015 fecha en la cual se hizo efectivo el cese de los servicios. 4.- Que las cláusulas del contrato de suma alzada firmado por las partes contenían como cláusulas relevantes las siguientes:...Cláusula Décima establece: ‘las partes dejan constancia que el presente contrato no implica la existencia de un vínculo laboral entre las partes si no que se enmarca única y exclusivamente en la prestación de servicios requeridos y descritos precedentemente’; decidiendo, a continuación, que el marco fáctico descrito da “cuenta que las partes suscribieron efectivamente sendos contratos de honorarios para realizar determinadas funciones que se encomendaron al demandante, y -por otro lado- ambos contrayentes desecharon en forma expresa todo vínculo laboral entre ambos, como aparece claramente señalado en la cláusula décima precitada, premisa fáctica que impide a esta Corte modificar la naturaleza jurídica de ese vínculo contractual, aludiendo a disposiciones legales que parten de un presupuesto distinto, contradiciendo lo que fue establecido en el juicio”, “así las cosas, mal puede transgredirse el artículo 11 de la Ley 18.834, toda vez que la*



*clara intención de los contratantes fue la de suscribir un contrato de honorarios, el cual se rige, como lo indica el inciso final de esa disposición ‘por las normas que establezca el respectivo contrato’, acto jurídico que, por cierto -como lo estipula la cláusula décima ya aludida- en caso alguno tiene una connotación laboral, de lo que se sigue que ese precepto, que tiene la condición de decisorio litis, ha sido correctamente aplicado por la juez a quo en el presente caso, contrariamente a lo que se arguye el recurso”. “Corolario de lo antes razonado, el resto de las disposiciones legales mencionadas en el arbitrio, como supuestamente vulneradas son intrascendentes para resolver el fondo de lo debatido, pues ninguno de esos preceptos tiene la virtud de revertir la naturaleza jurídica del vínculo contractual que ligó a las partes, esto es un contrato de honorarios de prestación de servicios por un tiempo determinado, al cual se le puso término por haber concluido el período por el cual se convinieron los servicios, razón por lo cual no influyen en lo dispositivo del fallo”.*

**Octavo:** Que, para dilucidar esta controversia, se debe tener presente el criterio permanente expuesto por esta Corte, en el sentido que el artículo 4 de la Ley N°18.883 establece la posibilidad de contratar a honorarios a personas naturales como un mecanismo a través del cual las municipalidades pueden obtener la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesitan llevar a cabo funciones ocasionales, específicas, puntuales y no habituales.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios, que no confiere a quien los desarrolla la calidad de empleado público, conduciéndose las partes por las cláusulas contenidas en el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las labores realizadas excedan los términos que establece la normativa aplicable, revelando caracteres propios del vínculo reglado en el Código del Trabajo, será este cuerpo normativo el que regirá la conducta de las partes, por no enmarcarse las pactadas en la hipótesis estricta que acepta el citado artículo 4.

**Noveno:** Que, contrastado tal razonamiento con el contenido del fallo impugnado, en especial, con los hechos establecidos por la judicatura del fondo, es claro que los servicios prestados por el demandante, además de no coincidir con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, dan cuenta de elementos que revelan con claridad la existencia de un vínculo laboral, atendido el desarrollo práctico que en la realidad concreta tuvo la relación descrita entre las partes, puesto que se acreditaron indicios que demuestran la correcta aplicación del artículo 7 del Código del Trabajo, por permanecer sujeto aquél a la dependencia y subordinación de la asesora jurídica de la demandada, cumpliendo funciones genéricas, permanentes y propias del servicio, además de otras ajenas a las



descritas en los respectivos convenios, por las que percibía un estipendio mensual, en condiciones disímiles a las que pueden considerarse como servicios sujetos a las características de especificidad y no habitualidad exigidas en el artículo 4 de la Ley N°18.883, o desarrolladas en la condición de acotada temporalidad que indica.

**Décimo:** Que, de esta manera, si bien se constata la disparidad jurisprudencial denunciada por la recurrente con los fallos acompañados, según se precisó, referida a la interpretación y aplicación dada a los preceptos ya citados, no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte por la vía del presente recurso invalide la sentencia de nulidad y altere lo decidido, por cuanto los razonamientos que contiene para acoger la pretensión del demandante se ajustaron a derecho, por lo que el arbitrio intentado será desestimado.

Por estas consideraciones y disposiciones citadas, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada contra la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°3.557-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Jessica González T., Mireya López M., y las abogadas integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma la ministra señora González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal. Santiago, diez de febrero de dos mil veinticinco.



En Santiago, a diez de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

